

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintiuno (21) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Cumplido el traslado de que trata el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, se procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario de doble instancia instaurado por GUSTAVO DE JESÚS GÓMEZ MESA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES- y la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCIÓN S.A. (Radicado 05001-31-05-019-2017-00699-01).

ANTECEDENTES

Pretende el demandante, previa declaración de nulidad del traslado al Régimen de Ahorro Individual, se ordene a Colpensiones tenerlo como su afiliado sin solución de continuidad. Además, se declare que es beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el régimen regulado en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990. Como consecuencia, solicita se condene a COLPENSIONES a reajustarle la pensión de vejez reconocida mediante la resolución GNR 228454 del 3 de agosto de 2016, teniendo como referencia una tasa de reemplazo del 90%, a la indexación de las condenas y a las costas del proceso (fl. 11).

Como sustento de sus pretensiones manifiesta sucintamente lo siguiente: Nació el 7 de febrero de 1954; para el momento de la entrada en vigencia de

la Ley 100 de 1993, cotizaba en el ISS; a partir del 1 de mayo de 1994 se trasladó del ISS a Protección S.A.; para este traslado recibió no solo información errada sino deficiente, lo que hizo que su consentimiento estuviera viciado de nulidad; una vez estuvo convencido de su error, regresó en 1998 al ISS; mediante resolución GNR 228454 del 3 de agosto de 2016, se le reconoció la pensión de vejez a partir del 1 de diciembre de 2012 (sic), con una tasa de reemplazo del 63.89% y un IBL de \$2.215.764; dado que este monto es deficitario, solicitó a Colpensiones el reajuste de la pensión, pero le fue negado; a Protección también le hizo algunas reclamaciones y peticiones, pero aún no se le ha dado respuesta (fls. 3 a 6).

Colpensiones como entidad demandada dio respuesta oportuna al escrito inicial. Se opuso únicamente a la prosperidad de la ineficacia, bajo el argumento que las pretensiones formuladas carecen de fundamentación fáctica y legal, en tanto la selección de régimen pensional es libre y voluntaria; aceptó los hechos relativos al nacimiento del demandante, a la vinculación al RPMPD, el traslado de éste al RAIS, el regreso a Colpensiones y al reconocimiento de la pensión de vejez; sostuvo que por regresar al régimen de prima media perdió los beneficios de la transición. Como excepciones de mérito propuso las que denominó: prescripción, inexistencia de vicio en el consentimiento, pérdida de régimen de transición, imposibilidad de condena en costas y compensación (fls. 60 a 71).

Protección S.A. también dio respuesta oportuna al escrito inicial. Exponiendo razones de hecho y de derecho, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, en especial las que apuntan a la ineficacia. Frente a los hechos manifestó, de unos, que se atenía a la prueba documental que los respaldaba; afirmó que no era cierto lo de la carencia de información, pues al demandante se le había dado la información correspondiente; de los demás dijo que no le constaban, en especial porque referían actos frente a Colpensiones. Como excepciones de mérito propuso las que denominó cumplimiento de los requisitos formales en la afiliación, asesoría adecuada y correcta, acto jurídico existente y válido, buena fe y prescripción (fls. 82 a 90).

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 13 de agosto de 2020, declaró la ineficacia del traslado del demandante del ISS al régimen de ahorro individual, administrado en su oportunidad por Protección S.A.; ordenó a Colpensiones a tener al señor Gómez Mesa siempre como su afiliado; declaró que el demandante fue beneficiario del régimen de transición de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990; condenó a Colpensiones a reajustar la pensión de vejez del demandante, disponiendo el pago de un retroactivo de \$33.598.187 por el período comprendido entre el 1 de junio de 2016 y el 31 de julio de 2020, la cual deberá indexarse al momento del pago; dispuso que la mesada pensional a partir del 1 de agosto de 2020 sería de \$2.350.977; y por último, le impuso las costas a Protección S.A., fijando como agencias en derecho la suma de \$1.097.254.00 (fl. 125).

Inconforme con la decisión, interpuso recurso de apelación la apoderada de Colpensiones, con el fin de que se revocara la ineficacia reconocida y, en su lugar, se absolviera de la misma. Varios argumentos expone: uno de ellos es el impacto económico que produce un traslado; otro, que la carga de la prueba no se puede trasladar de manera absoluta a los fondos de pensiones; y uno más, que existen deficiencias probatorias, pues lo que se expuso en los hechos de la demanda y lo que contestó el demandante en el interrogatorio de parte son cosas bien diferentes. Reconoce que no existe prueba de la manera como acaecieron los hechos que dieron lugar al traslado. Sostiene también que por haberse trasladado al RAIS perdió los beneficios de la transición. De manera subsidiaria, y para el evento en que se confirme la decisión, solicita se disponga la devolución de las sumas retenidas por cuotas o gastos de administración y Fondo de Garantía de Pensión Mínima (CD fl. 126 tiempo 1:11:58 a 1:18:09)

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

La Sala restringirá su estudio a los puntos objeto de apelación planteados por la apoderada recurrente, conforme a las directrices que para el efecto traza el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, en concordancia con el artículo 35 de la Ley 712 de 2001. Aquellas condenas u órdenes impuestas a la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones que no hayan sido apeladas serán estudiadas por la vía de la consulta (art. 69 del C.P. del T. y de la S.S.), de conformidad con el criterio expresado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias del 26 de noviembre y 4 de diciembre de 2013, rads. 34552 y 51237, y más recientemente por la sentencia de tutela SLT7382-2015 (Rad. 40200).

Fuera de toda discusión, por existir plena prueba de ello, está que el demandante nació el 7 de febrero de 1954 (fls. 15); que se afilió al Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones, desde el 26 de mayo de 1986 (fl. 87); que estando afiliado a esta administradora del RPM se trasladó al RAIS el 1 de mayo de 1994, concretamente a la AFP PROTECCIÓN S.A. (fl. 16); que regresó nuevamente a Colpensiones el 1 de septiembre de 1998 (fl. 16); y por último, que esta última entidad, le reconoció la pensión de vejez con sustento en la Ley 797 de 2003, mediante resolución GNR 228454 del 3 de agosto de 2016, a partir del mes de agosto de 2016, prestación para la que se tuvo en cuenta 1302 semanas cotizadas, un IBL de \$2.215.764 y una tasa de reemplazo del 63.89% (fls. 18 a 22).

Partiendo de lo anterior, y por supuesto de los reparos formulados por la apoderada de Colpensiones, del contexto de los hechos y pretensiones de la demanda, y de lo que debe estudiarse por el grado de la consulta, lo primero que debe esclarecerse es si el traslado del demandante del RPMPD al RAIS fue o no ajustado a la ley, y en caso de que no lo hubiere sido, analizar si hay lugar o no a la devolución de aportes, rendimientos y demás ítems. Esto implica establecer, entre otros asuntos, si la voluntad del accionante al momento de

trasladarse del RPMPD al RAIS estuvo afectada por un vicio en el consentimiento o conducta antijurídica.

Para estos fines, la Sala estima del caso hacer referencia textual a algunos apartes de la sentencia dictada por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia el pasado 8 de mayo (SL1688-2019, Rad. 68838), la cual compendia para el día de hoy, con total claridad y precisión, el estado de la materia en asuntos de ineficacia de traslados de régimen pensional por falta de una adecuada información, las consecuencias de la declaración dada por los afiliados en los documentos de traslado de régimen, la carga de la prueba, y los alcances de la ineficacia y las reasesorías que se realizan con posterioridad al traslado inicial, entre otros. Sobre el deber de información, en ésta quedó dicho:

El anterior recuento sobre la evolución normativa del deber de información a cargo de las administradoras de pensiones podría, a grandes rasgos, sintetizarse así:

Etapa acumulativa	Normas que obligan a las administradoras de pensiones información	Contenido mínimo y alcance del deber de información
Deber de información	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 Art. 97, numeral 1.º del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003 Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales Y autonomía personal	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición V la eventual pérdida de beneficios pensionales

Deber de información, asesoría y buen consejo	Artículo 3.º, literal c) de la Ley 1328 de 2009 Decreto 2241 de 2010	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle
Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	1748 de 2014 Artículo 3.º del Decreto 2071 de 2015 Circular Externa n.º 016 de 2016	Junto Con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

1.4 Conclusión: La constatación del deber de información es ineludible

Según se pudo advertir del anterior recuento, las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional. Desde luego que con el transcurrir del tiempo, el grado de intensidad de esta exigencia cambió para acumular más obligaciones, pasando de un deber de información necesaria al de asesoría y buen consejo, y finalmente al de doble asesoría. Lo anterior es relevante, pues implica la necesidad, por parte de los jueces, de evaluar el cumplimiento del deber de información de acuerdo con el momento histórico en que debía cumplirse, pero sin perder de vista que este desde un inicio ha existido.

Así las cosas, el Tribunal cometió un primer error al concluir que la responsabilidad por el incumplimiento o entrega de información deficitaria surgió con el Decreto 019 de 2012, en la medida que este exista desde la expedición de la Ley 100 de 1993, el Decreto 663 de 1993 y era predicable de la esencia de las actividades desarrolladas por las administradoras de fondos de pensiones, según se explicó ampliamente.

Adicionalmente, la Sala no puede pasar por alto la indebida fundamentación con la que la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal de Medellín emitió su sentencia, pues sin razón alguna se limitó a señalar que a partir del Decreto 019 de 2012 es imputable responsabilidad por omisión o cumplimiento deficitario del deber de información a las AFP, sin especificar la norma de ese decreto que le daba sustento a su dicho y sin la construcción de un argumento jurídico que soportara su tesis. Es decir, la sentencia estuvo desprovista de una adecuada investigación normativa y un discurso jurídico debidamente fundamentado.

En cuanto a las consecuencias de las constancias que se registran en los formularios de afiliación o traslado, se dijo:

2. El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente. Necesidad de un consentimiento informado

Para el Tribunal el consentimiento informado no es predicable del acto jurídico de traslado, pues basta la consignación en el formulario de que la afiliación se hizo de manera libre y voluntaria.

La Sala considera desacertada esta tesis, en la medida que la firma del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos preimpresos de los fondos de pensiones, tales como «la afiliación se hace libre U voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otro tipo de leyendas de este tipo o aseveraciones, no son suficientes para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acreditan un consentimiento, pero no informado.

Sobre el particular, en la sentencia CSJ SI. 19447-2017 la Sala explicó:

Por demás las implicaciones de la asimetría en la información, determinante para advertir sobre la validez o no de la escogencia del régimen pensional, no solo estaba contemplada con la severidad del artículo 13 atrás indicado, sino además el Estatuto Financiero de la época, para controlarla, imponía, en los artículos 97 y siguientes que las administradoras, entre ellas las de pensiones, debían obrar no solo conforme a la ley, sino soportadas en los principios de buena fe «y de servicio a los intereses sociales» en las que se sancionaba que no se diera información relevante, e incluso se indicaba que «Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado».

Ese mismo compendio normativo, en su precepto 98 indica que al ser, entre otras las AFP entidades que desarrollan actividades de interés público, deben emplear la debida diligencia en la prestación de los servicios, y que «en la celebración de las operaciones propias de su objeto dichas instituciones deberán abstenerse de convertir cláusulas que por su carácter exorbitante puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante», es decir, no se trataba únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, tanto en el cambio de prima media al de

ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición, aspecto que soslayó el juzgador al definir la controversia, pues halló suficiente una firma en un formulario[...].

De esta manera, el acto jurídico de cambio de régimen debe estar precedido de una ilustración al trabajador o usuario, como mínimo, acerca de las características, condiciones, acceso, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de los riesgos y consecuencias del traslado.

Por tanto, hoy en el campo de la seguridad social, existe un verdadero e insoslayable deber de obtener un consentimiento informado (CSJ Sl. 19447-2017), entendido como un procedimiento que garantiza, antes de aceptar un ofrecimiento o servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen. Vale decir, que el afiliado antes de dar su consentimiento, ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna.

Como consecuencia de lo expuesto, el Tribunal cometió un segundo error jurídico al sostener que el acto jurídico de traslado es válido con la simple anotación o aseveración de que se hizo de manera libre y voluntaria y, por esa vía, descartar la necesidad de un consentimiento informado.

En materia de carga de la prueba del deber de información, anotó:

En consecuencia, si se arguye que a la afiliación, la AFP no suministró información veraz y suficiente, pese a que debía hacerlo, se dice con ello, que la entidad incumplió voluntariamente una gama de obligaciones de las que depende la validez del contrato de aseguramiento. En ese sentido, tal afirmación se acredita con el hecho positivo contrario, esto es, que se suministró la asesoría en forma correcta. Entonces, como el trabajador no puede acreditar que no recibió información, corresponde a su contraparte demostrar que sí la brindó, dado que es quien está en posición de hacerlo.

Como se ha expuesto, el deber de información al momento del traslado entre regímenes, es una obligación que corresponde a las administradoras de fondos de pensiones, y su ejercicio debe ser de tal diligencia, que permita comprender la lógica, beneficios y desventajas del cambio de régimen, así como prever los riesgos y efectos negativos de esa decisión.

Y por último, en cuanto al alcance de la ausencia del deber de información y de los nulos efectos que pueden generar las reasesorías posteriores, quedó dicho:

Lo anterior, se repite, sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo. Esto, desde luego, teniendo en cuenta las particularidades de cada asunto.

...

Ahora, si bien la AFP brindó a la actora una reasesoría el 26 de noviembre de 2003, en virtud de la cual se concluyó la inconveniencia de continuar en Protección S.A., la Sala considera que este servicio no tiene la aptitud de subsanar el incumplimiento de la obligación de información en que incurrió la AFP al momento del traslado, por dos razones:

En primer término, porque el traslado al RAIS implicó la pérdida de los beneficios derivados de la transición al no contar la demandante con 15 años de cotización o servicios a 1.º de abril de 1994. Es decir, así se hubiese trasladado la demandante al día siguiente de la reasesoría, de todas formas ya había perdido la transición.

En segundo lugar, porque la oportunidad de la información se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad. Como se dijo, el afiliado requiere para tomar decisiones de la entrega de datos bajo las variables de tiempo e información, que le permitan ponderar costos, desventajas y beneficios hacia el futuro. Desde este punto de vista, un dato solo será relevante si es oportuno, es decir, si al momento en que se entrega brinda al destinatario su máximo de utilidad. Por el contrario, si la asesoría no se otorga oportunamente y, por tanto, pierde su utilidad, ello equivale a la ausencia de información.

Por otro lado, no es de recibo el planteo de Protección S.A., cuando sostiene que una vez realizó la reasesoría, Myriam Arroyave Henao no mostró interés en la ineficacia de la vinculación al RAIS, al conservar su status de afiliada durante un tiempo, Se dice lo anterior ya que la sugerencia de Protección S.A. de regresar al RPMPD, se produjo el 26 de noviembre de 2003, y el formulario para la nueva afiliación al ISS se diligenció el 14 de enero de 2004 (f.º 97), es decir, la interesada no dejó transcurrir dos meses desde que recibió asesoría. Por lo demás, este lapso es razonable, pues dada la relevancia de esta determinación, era natural que la accionante se

tomara un tiempo de reflexión, buscara información y consejo profesional para, finalmente, adoptar su elección.

Con sustento en estos presupuestos, esta Colegiatura comparte la decisión proferida por el *a quo* en este aspecto, de ahí que habrá de confirmarse el punto, pues basta la mera ausencia de información al afiliado, clara, precisa y completa, para que se produzca la irregularidad del acto de cambio de régimen pensional, situación que fue exactamente la que ocurrió en el presente caso; a la Sala no le queda la menor duda que la demandada, en este caso, Protección S. A., al no haber arrimado al proceso prueba idónea y completa de la información que se le debió de haber brindado al señor Gustavo de Jesús Gómez Mesa en el traslado que éste realizó en 1994, y no inferirse ésta del interrogatorio de parte que se le formuló, la consecuencia no puede ser otra diferente a la de declarar ineficaz tal acto y, por tanto, tener como vinculación válida la que tenía con el Régimen de Prima Media con Prestación definida. Anótese que a las diferencias que se destacan en el recurso, en cuanto a lo dicho en los hechos de la demanda y en el interrogatorio de parte, no descalifican la conclusión, en tanto de ambas versiones lo que se colige es una falta de información.

Esto que se dice conlleva entonces, acorde con el precedente jurisprudencial antes referido, a que las partes deben ser restituidas al estado anterior (art. 1746 del CCC), pero como el demandante se trasladó en el año 1998 nuevamente a Colpensiones, y esta administradora le reconoció la pensión de vejez, lo que hace pensar que ya se devolvió la cuenta de ahorro pensional y sus rendimientos, que lo único a disponer sea la devolución de lo deducido por gastos de administración, Fondo de Garantía de Pensión Mínima y seguros previsionales, y Colpensiones a recibirlos. Ratifica lo anterior, y en especial sobre los gastos de administración, lo que sostiene la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema en la sentencia SL1421-2019, Rad. 56174, en la cual se dice lo siguiente:

“Conforme a lo establecido en sede de casación, fuerza concluir entonces, que debe declararse la ineficacia de la afiliación de la demandante al sistema pensional de ahorro individual, debiendo retrotraerse las cosas al estado en que se encontraban, es decir, como si ello no hubiera ocurrido, lo cual trae como consecuencia, que la actora jamás perdió el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100/93, y de igual forma, que el Fondo de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A. deba devolver los aportes por pensión, los rendimientos financieros y los gastos de administración al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, como en oportunidades anteriores lo ha dispuesto la Sala, pudiéndose traer a colación las sentencias CSJ SL17595-2017 y CSJSL4989-2018, donde se rememoró la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989 ...”.

Y de manera más precisa, en cuanto a todos los conceptos antes anotados, esta misma Corporación en sentencia del pasado 29 de julio (SL 2877 2020, Rad. 78667), expresó:

En el sub lite, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.

Ahora, los efectos de la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional cobija a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el accionante en el RAIS, aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implica dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen; en otros términos, es la inscripción en ese esquema pensional la que se cuestiona como una sola, lo que involucra a las demás AFP, así ellas no hayan intervenido, se reitera, en la primera admisión. Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal.

Lo precedentemente ordenado, se deberá realizar por Protección S.A. a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta decisión, todo en aras de velar por la sostenibilidad financiera del régimen de prima media, y de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del decreto 692 de 1994.

Las excepciones propuestas estuvo bien que no se declararan probadas: unas por no envolver hechos extintivos o modificativos de los derechos reconocidos, entre ellas las de no existió ningún vicio en el consentimiento al firmar su afiliación, falta de causa para demandar, buena fe; y otras, como la de prescripción, por estar comprometido un derecho pensional. En la sentencia inicialmente citada, se anotó:

Conforme lo explicado, los afiliados al sistema general de pensiones pueden solicitar, en cualquier tiempo, que se declare la ineficacia del traslado entre regímenes pensionales y, por esa vía, que se reconozca a cuál de los dos regímenes pensionales (RPMPD o RAIS) se encuentran afiliados. Lo expuesto no es algo nuevo en la jurisprudencia del trabajo, pues incluso desde la sentencia CSJ SL795-2013 ya la Corte había adocinado que «el asegurado está legitimado para interponer, en cualquier tiempo, reclamos relacionados con la afiliación, las cotizaciones, el ingreso base de cotización y todos aquellos componentes de la pensión».

Hay que mencionar que así como la declaración de ineficacia es imprescriptible, los derechos que nacen de ello también tienen igual connotación. En efecto, conforme al artículo 48 de la Constitución Política, el derecho a la seguridad social es un derecho subjetivo de orden irrenunciable, premisa que implica al menos dos cosas: (i) no puede ser parcial o totalmente objeto de dimisión o disposición por su titular (inalienable e indisponible), como tampoco puede ser abolido por el paso del tiempo (imprescriptible) o por imposición de las autoridades sin título legal (irrevocable). En este sentido, la jurisprudencia del trabajo ha sostenido que el derecho a la pensión o a obtener su valor real, puede ser justiciado en todo tiempo (CSJ SL8544-2016).

Por último, frente al reajuste de la pensión de vejez ordenado, punto que se estudia por el grado de la consulta, la Sala considera que lo dispuesto se ajusta debida y cabalmente a derecho, en tanto si lo dispuesto es que el demandante

nunca dejó de ser afiliado del régimen de prima media, obvio es que es beneficiario de la transición pensional, pues tenía más de 750 semanas cotizadas a la fecha de vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, además de que las operaciones aritméticas correspondientes que se realizan teniendo en cuenta los presupuestos inicialmente señalados de número de semanas cotizadas, monto de IBL y tasa de reemplazo, llevan a los mismos resultados a los que llegó el a quo.

En conclusión, el fallo de primer grado se habrá de confirmar, salvo en los conceptos que debe devolverse por parte de PROTECCIÓN S.A. a COLPENSIONES, punto que se adicionará, para disponer que se reintegrará, en el plazo señalado, los dineros descontados para gastos o cuotas de administración, seguros previsionales y Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

No existiendo otros puntos que resolver, las costas de la primera instancia seguirán estando a cargo de Protección S.A., y a favor del demandante. Atendiendo a que el recurso de apelación propuesto por Colpensiones prosperó de manera parcial, se estima que en esta instancia no debe haber condena en costas.

DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la sentencia objeto de apelación y consulta, de fecha y procedencia conocidas, excepto en lo que atañe a las sumas a reintegrar por PROTECCIÓN S.A. a COLPENSIONES, punto que se **ADICIONA** en el sentido de que se debe devolver los dineros retenidos para gastos o cuotas de administración, seguros previsionales y el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria

de esta decisión, tal como quedó brevemente dicho en la parte motiva de esta providencia.

Sin costas en esta instancia.

La presente decisión queda notificada en los **ESTADOS ELECTRÓNICOS** de que trata el artículo 9 del Decreto 806 de 2020.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIERREZ SALAZAR

Certifico: Que la sentencia anterior fue notificada por
ESTADOS N° 67 fijados el 22 de abril de 2021
en la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

El Secretario.